

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE



Reporte de Monitoreo | Jul - Sep 2023

Implementadores



141

Proyectos



87.5M

Fondos asignados



135

Organizaciones de la
Sociedad Civil



13

AFPs de ONU

Este ámbito apunta a promover la reforma rural integral, el desarrollo rural y la seguridad humana con el objetivo de cerrar brechas históricas, reducir la inequidad y fortalecer la seguridad. El Fondo ha acompañado al Estado colombiano en el abordaje de algunos de los factores estructurales que han generado desigualdad, exclusión y conflicto en el país, a través iniciativas que promueven la justicia, la rehabilitación socioeconómica, la prevención del reclutamiento forzoso, el aumento de las capacidades institucionales y de organizaciones de la sociedad civil para la prevención de conflictividades y el aumento del capital social, así como la consolidación de las acciones contra minas antipersonal para la protección y el uso de la tierra por parte de las comunidades.

APOYO A LA ESTRATEGIA PDET

Participación comunitaria y apoyo a la Agencia de Renovación del Territorio (ART): El Fondo apoyó la creación de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) encargada de la formulación e implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se facilitó el proceso de convocatoria y negociación de prioridades en más de 10 municipios, logrando consensos para la formulación de 10 PDET y 4 acuerdos de desarrollo regional (PATR).

Fortalecimiento de los PDET a nivel municipal: Se implementó una estrategia de apoyo a los PDET en colaboración con las Alcaldías y los grupos Motor. Esta estrategia permitió incluir 12.357 iniciativas PDET en los Planes de Desarrollo Municipal, fortalecer las capacidades de los grupos motor y aumentar la capacidad de las Alcaldías para la formulación y consecución de recursos para las acciones PDET. En particular en la región en los 8 municipios del Catatumbo se identificaron y habilitaron para su implementación 138 iniciativas PDET, se apoya la formulación de los Planes de Desarrollo Municipal en clave PDET y se apoya el relacionamiento entre la institucionalidad y las autoridades étnico-territoriales.

Estrategia integral en Carmen de Darién y Riosucio: En estos municipios, se invirtieron 4.8 millones de dólares en una estrategia que abordó iniciativas de reconciliación, mejora de condiciones educativas, seguridad alimentaria a través de huertas comunitarias, apoyo a emprendimientos agrícolas y obras de infraestructura comunitaria.

Impulso a la cadena de valor del cacao en Catatumbo: En el marco de la Hoja de Ruta PDET para la región del Catatumbo, se impulsa la cadena de valor del cacao con familias campesinas e indígenas de la comunidad Barí, a través de ocho asociaciones productoras. Adicionalmente, se mejoran tramos viales y se apoya la reforestación de 200 hectáreas a través de la entrega de 8.000 plántulas a 200 familias que participan de la producción del cacao.

Estrategia de finanzas mixtas y apoyo a productores agrícolas: Se implementó una estrategia que involucra al sector privado y permitió movilizar 13 millones de dólares, con una contribución del Fondo de 2.1 millones de dólares. Esto respaldó cinco líneas productivas y dos líneas de crédito para productores agrícolas en 60 municipios PDET, resultando en más de 5,700 créditos otorgados y beneficiando a más de 3,000 personas.

Obras de infraestructura comunitaria en 58 municipios: El Fondo respaldó la construcción de 288 pequeñas obras de infraestructura comunitaria, que beneficiaron a más de 52,512 personas. Además, se llevaron a cabo 19 obras de infraestructura de mayor impacto, con la participación de la comunidad, en los departamentos de Nariño y Norte de Santander.

Apoyo a justicia local y rural: El Fondo ha apoyado la implementación de modelos de justicia local y rural en 35 municipios de 9 departamentos. Se diseñaron planes de mejora con las Comisarías de familia para prevenir la Violencia Basada en Género (VBG). Se capacitaron 652 personas en justicia juvenil restaurativa y se crearon triadas municipales para la atención de casos. Además, se procesaron 18 casos.

Protección de defensores/as de DDHH: Se brindó apoyo a 29 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y 60 organizaciones aliadas para la protección de líderes y lideresas de DDHH. Se fortalecieron 13 redes de defensores/as, se formularon 28 agendas de incidencia y se crearon 18 protocolos de protección y autoprotección. Además, se hicieron 43 reportes de amenazas y se creó un diplomado de protección con enfoque étnico en el que participaron 85 personas.

Estrategia interinstitucional para la protección en Chocó, Catatumbo y el Pacífico Nariñense: Se implementó una estrategia en colaboración con el Ministerio del Interior, la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Alcaldías Municipales y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Se lanzó el sistema SAGA para consolidar información útil contra el crimen organizado. Se formaron 1583 líderes/as, se implementaron planes de prevención de riesgos y se apoyaron 50 emprendimientos.

Prevención del reclutamiento forzado de menores: Se apoyó la estrategia estatal para prevenir el reclutamiento forzado de menores, logrando la participación de más de 42,000 niños/as y adolescentes en iniciativas culturales y deportivas. 700 funcionarios públicos recibieron herramientas para prevenir el reclutamiento.

Alertas tempranas y monitoreo de la respuesta del Estado: Se emitieron 100 alertas tempranas gracias al aumento de la capacidad territorial de la Defensoría del Pueblo, que ahora tiene presencia en 47 municipios y 16 departamentos. Se crearon metodologías para monitorear la respuesta del Estado en temas prioritarios.

Apoyo a la política de sustitución de cultivos ilícitos: 600 mujeres ex recolectoras de hoja de coca y sus familias vinculadas al PNIS crearon micronegocios y negocios colectivos, que generaron ventas por 1,175 millones de pesos. Otras 124 familias reciben insumos para mejorar la productividad de sus predios y 8 asociaciones de productores campesinos han sido fortalecidas mediante talleres empresariales y de comercialización.

Promoción de los derechos de las mujeres y su participación en la construcción de paz: 51 OSC trabajan para promover la defensa de los derechos de las mujeres y su participación en la construcción de paz. Esto incluye el fortalecimiento de 33 organizaciones, la construcción de 24 planes de incidencia, 22 estrategias comunicativas y el empoderamiento de 1811 mujeres en la exigencia de medidas de protección para sus derechos.

Acceso a agua potable: 2,800 personas en Puerto Asís (Putumayo) y Tumaco (Nariño) obtuvieron acceso a agua potable a través de filtros y mejoras en acueductos y redes de suministro.

Atención primaria de salud en municipios cercanos a AETCR: En 25 municipios cercanos a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), 54,000 personas recibieron servicios de atención primaria de salud. Se capacitó a profesionales de la salud y líderes comunitarios, y se proporcionaron servicios de atención médica a niños/as menores de 5 años.

Respuesta al COVID-19: El Fondo destinó US\$4.6 millones para apoyar la respuesta al COVID-19 en los 170 municipios PDET. Se dotaron 92 IPS con elementos de protección, y se atendieron a más de 5,717 personas en el Hospital Ismael Roldón en Quibdó, Chocó.

Incremento de seguridad alimentaria y capacidad productiva: Se mejoró la seguridad alimentaria y capacidad productiva en los municipios de Riosucio y Carmen del Darién a través de aves de corral, cultivos de maíz y frijol, una planta de transformación agroindustrial de plátano y huertas comunitarias.

Apoyo a la educación en el Chocó: Se apoyó el desarrollo de un documento de "Bases de Política Pública de Educación Media para el Chocó." Se priorizaron 12 escuelas en Riosucio y Carmen del Darién y se consolidó el Programa Universidad al Campo, brindando educación técnica-profesional a jóvenes.



AICMA



3
Proyectos



2M
Fondos asignados

Implementadores



8
Organizaciones de la
Sociedad Civil



2
AFPs de ONU
UNMAS - UNOPS

A finales de 2016 Colombia era el segundo país en el mundo en número de víctimas nuevas de minas antipersonal y remanentes explosivos de guerra, superado solo por Afganistán, de ahí la importancia de apoyar las actividades de desminado humanitario una vez firmado el Acuerdo para garantizar la seguridad de las comunidades y generar su confianza en el Estado y el proceso de construcción de paz. El Fondo ha apoyado a la autoridad nacional y a los operadores civiles en la implementación de la estrategia de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), que comprende el desarrollo de actividades de despeje de tierras de minas antipersonal y artefactos explosivos, educación en el riesgo de minas y la entrega de los territorios a las comunidades con miras a promover el desarrollo territorial.

DESMINADO HUMANITARIO

Desminado humanitario: 7 operadores civiles de desminado humanitario llevaron a cabo estudios y despeje de minas en 9 municipios de 5 departamentos, despejando un total de 117,615 metros cuadrados de territorio.

Acceso a áreas previamente minadas: Más de 14,000 personas pueden ahora acceder a áreas antes inaccesibles debido a minas antipersonales. Estas tierras pueden utilizarse para proyectos agrícolas, mejorando los ingresos de la población y promoviendo el desarrollo territorial.

Proyectos de restauración ambiental: Los operadores construyeron invernaderos de hortalizas de uso comunitario y promovieron la siembra de árboles para restaurar ecosistemas afectados.

Inclusión productiva: Se promovió la inclusión productiva de 800 personas a través del financiamiento de cuatro invernaderos para el cultivo de productos agrícolas. Se realizaron talleres para que las comunidades comprendieran la relación entre actividades comunitarias, empresas privadas, institucionalidad y servicios ambientales.

Organización de desminado humanitario: Se apoyó esta organización compuesta por 75 personas en proceso de reincorporación. HUMANICEMOS DH llevó a cabo 213 talleres de educación en riesgo de minas, en los cuales participaron 3.084 personas y despejó 44.591 metros cuadrados de territorio. Asimismo, se adelantaron dos iniciativas de desarrollo comunitario (mejora en la infraestructura de las instalaciones del Colegio de Solita y construcción de Huertas Comunitarias y Piscicultura que llevan a cabo los estudiantes). Esta organización fue asesorada por UNMAS para la mejora de sus procesos de gestión de calidad.

EDUCACIÓN EN RIESGO DE MINAS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Educación en riesgo de minas: 48,089 personas recibieron educación sobre riesgo de minas en 38 municipios de 17 departamentos. Se llevaron a cabo 965 actividades de sensibilización en colaboración con las comunidades, instituciones educativas y la institucionalidad local.

Atención a víctimas de MAP/MSE/AEI: 160 víctimas de Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explotar (MSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) accedieron a procesos de atención en rehabilitación física y psicosocial. También se les proporcionó información sobre la oferta institucional para mejorar su calidad de vida.

Enfoques diferenciales: Se desarrollaron espacios que abordaron enfoques diferenciales, como ciclo de vida (infancia y tercera edad), desplazamiento y/o situaciones derivadas del conflicto armado, discapacidad y pertenencia étnica. Esto se hizo con el objetivo de aumentar los niveles de inclusión en las comunidades.

IMPULSO TERRITORIAL DE LA POLÍTICA AICMA

Fortalecimiento de mecanismos de coordinación nación-territorio: Se fortalecieron los mecanismos de coordinación entre el nivel nacional y los territorios, incluyendo los Comités de Justicia Transicional, las Mesas de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), y los subcomités de Víctimas. Esto amplió la presencia y capacidad de respuesta de la Autoridad Nacional contra Minas Antipersonal en el territorio.

Apoyo a autoridades locales en la planificación de la política AICMA: Las autoridades locales recibieron apoyo en la elaboración de herramientas de planificación de la política AICMA, como los Planes Departamentales, las matrices AICMA y los Decretos Departamentales de las Mesas AICMA. Esto permitió a las Autoridades Locales aumentar las acciones de Desminado Humanitario, Víctimas y ERM de acuerdo con las necesidades de cada municipalidad.

Articulación con otras entidades: Se llevó a cabo un proceso de articulación a gran escala con diversas entidades, incluyendo la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad de Gestión y Restitución de Tierras (URT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV). Esto resultó en acciones como fallos de jueces de restitución de tierras para la entrega de parcelas libres de sospecha de minas, desarrollo de proyectos rurales y la identificación de víctimas de minas antipersonal, con un acompañamiento acorde a sus necesidades.